

chos que tuvieron lugar en un juicio que no tenga la premura de ésta ley.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 18, 101 y 102 constitucionales, se decretar: que es de revocarse y se revoca la sentencia del inferior, que negó el amparo á los CC. José María Guerra y Romualdo Salinas, contra la pena de muerte á que los condenó el C. Alcalde 1º de la Villa de Marín, y se declara: 1º que la Justicia de la Union ampara y protege á los mencionados CC. contra los actos de que se quejan, 2º consígnense á los quejosos á la autoridad competente:

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen acompañándole testimonio de ésta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*Miguel Auza.*—*José Arteaga.*—*José María Lozano.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Ramírez.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 25 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

DILIGENCIAS

Practicadas con motivo del acuerdo de 10 de Julio último del Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia, que suspendió al Juez de Distrito de Sinaloa Lic. Pedro S. Bermudez del ejercicio de sus funciones.

Pedimento del C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Magistrado.

El Promotor fiscal dice: ha examinado con detenimiento tanto los cargos que se hacen al C. Juez de Distrito de Sinaloa por sus procedimientos respecto de las reclamaciones hechas contra México por varios Americanos, y principalmente las relativas á la mina llamada "Santa Barbara" de la compañía la "Cordillera," y la de Teheophilus Taliaferro; así como el informe justificado del referido Juez de Distrito, y encuentra: que en su concepto no ha incurrido en responsabilidad; y si bien es cierto que sus procedimientos no han dado un resultado favorable á los intereses de México por lo que hace á las reclamaciones indicadas, esto no puede atribuirse á su poca aptitud ó á falta de diligencia y celo en el desempeño de sus deberes.

En efecto, C. Magistrado, que solo se haya examinado al Sr. Lice y no á su socio Vico, se explica perfectamente por la circunstancia de formar ambos una sociedad mercantil, y de que lo que uno declarara sería la expresión de lo que dijera el otro; y con tanta mas razón cuanto que como se manifiesta en la información relativa, si se examinó á Lice y no á Vico, fué por que el primero tenía conocimiento del asunto y el segundo no habia intervenido en él.

Que si el Sr. Rajo y Esquerri y D. Andres Lanceter, fueron examinados relativamente á la reclamación de la compañía la "Cordillera," sus dichos no pueden consi-

derarse parciales, pues que como demuestra el C. Juez de Distrito, ellos ningún interés tenían para declarar en determinado sentido.

El cargo mas fuerte que se hace al Juez de Distrito consiste seguramente en que no consta justificada la negacion del permiso al Capitan del Bergantin "Sonni South" para descargar en la Playa Colorada; mas es indudable que esta justificacion corresponde al reclamante y no á las autoridades Mexicanas; puesto que como dice muy bien el Juez de Distrito, por la ley de México esta prohibido el descargar efectos extranjeros en puertos no habilitados para el comercio de altura, como sucede en la Playa Colorada; y si hubo negativa de parte de la Aduana para conceder el permiso de descargar en dicho punto, al reclamante corresponde sin duda justificarlo.

Los demás cargos que se hacen al Juez de Distrito, cree el que suscribe que quedan perfectamente desvanecidos con las razones expuestas por él en su informe justificando.

En general puede decir el que habla, que le constan la diligencia y celo del Juez de Distrito para procurar todas las defensas de México en contra de las reclamaciones hechas por CC. Americanos. Ademas es necesario tener en cuenta las dificultades que se presentan para la practica de una informacion, la falta de testigos, la ignorancia de quienes pueden declarar la parcialidad de sus deposiciones por el interés mas ó ménos directo que tienen ó han tenido con los reclamantes, y la ignorancia sobre todo de que perjudican á su patria con sus declaraciones, tratando solo de no quedar mal con los interesados en reclamar, hacen que las diligencias mandadas practicar en defensa de los intereses de México no den los resultados favorables que seían de desear.

Con lo expuesto por el C. Juez de Distrito y por los justificantes que acompaña, se demuestra patentemente su irresponsabilidad y que la suspension en el ejercicio de sus funciones debe levantarse, por no ha-

ber méritos para declararlo con lugar á formacion de causa.

Así pula el que suscribe se sirva resolverlo el Tribunal, pudiendo para mejor justificacion pedir de la Aduana marítima un informe sobre si hay constancias en su archivo de que se haya solicitado permiso para desembarcar en la Playa Colorada, el molino y maquinaria que trajo el Bergantin "Sonni South."

Mazatlan, Setiembre 7 de 1871.—L. Gómez.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Mazatlan, Setiembre 9 de 1871.—Vistas estas diligencias practicadas con motivo del acuerdo de 10 de Julio último, del Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia, que suspendió al Juez de Distrito de Sinaloa, Lic. Pedro S. Bermúdez, del ejercicio de sus funciones, por queja del Ministerio de Relaciones, de que el expresado Juez había manifestado ineptitud y poca diligencia en la practica de unas informaciones que se le habían encargado practicara con motivo de varias reclamaciones de ciudadanos Americanos contra México; y particularmente de la que hace la Compañia minera de la "Cordillera." Visto el informe del Juez suspenso; el dictámen del Promotor fiscal de este Tribunal, y la informacion que el Juez practicó sobre la reclamacion de la dicha Compañia de la Cordillera, que es la única que se ha puesto en conocimiento del Tribunal, y teniendo presente que efectivamente se nota poco cuidado y diligencia por parte del Juez en esa informacion, como se vé por los mismos autos que en ella dictó, desconociéndose de averiguar lo que se pudiera relativo á alguno de los principales hechos contenidos en la reclamacion; qué á lo mal practicado de esa informacion contribuyó en mucho la circunstancia de que nada promovió el Promotor fiscal como debió hacerlo en desempeño de su ministerio;

que no bastan á exculpar al Juez las razones que expone en su informe; que por lo mismo ambos funcionarios se han hecho acreedores á una demostración por parte de este Tribunal, no encontrando mérito bastante para instruirles un proceso; por tanto, el Tribunal de conformidad con la ley de 24 de Marzo de 1813 y la de 29 de Julio de 1862, resuelve con las proposiciones siguientes:

1º: Se levanta la suspensión del Juez de Distrito de Sinaloa Lic. Pedro S. Bermúdez, que se le ordenó por el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia en 10 de Julio último.

2º: Se hace un serio extrañamiento tanto al expresado Juez como al Promotor fiscal Lic. Ladislao Gaona, por la falta indicada, apercibiéndoles de mayor demostración si reinsidieran, y recomendándoles todo el empeño y estudio posibles en asuntos como la reclamación de la "Cordillera," en que se versan la honra y los intereses nacionales.

3º: Notifíquese, comuníquese al Juez suspendido para que vuelva al ejercicio de sus funciones, y remítanse estas diligencias á la Suprema Corte de Justicia.

El Magistrado del Tribunal de Circuito de Mazatlan, lo decretó y firmó.—*Pacheco.*
—*Juan M. Iturríos.*

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal dice: que á consecuencia de una reclamación que presentaron ante la comisión Unida de la República Mexicana y la de los Estados Unidos de América, sus súbditos Nathaniel Page, Guillermo N. Wade, Guillermo H. Fillinghast, Isaac M. Rutan y Enrique R. Reed, haciéndola consistir en que habiendo organizado entre sí, y á principios del año de 1873, una sociedad minera que giraba bajo la razón social "Compañía minera de oro y plata de la Cordillera," y pretendiendo explotar en tal sentido la mina

denominada Santa Bárbara, situada en el Distrito minero de Morelos, Estado de Chihuahua, á consecuencia de las circunstancias acaídas por las que atravesaba entonces el país, se vieron interrumpidos en sus trabajos por las fuerzas mexicanas, perdieron la maquinaria que habían contratado para las labores, quedando tirada en el camino durante dos años, entre un lugar llamado Bacubirito y la expresada mina Santa Bárbara, resintiéndose además otro gran número de perjuicios, ya con el extravío de efectos de todo género, pero propios para la subsistencia de los operarios, ó útiles para el trabajo á que se iban á dedicar, ya con las pérdidas de muchas mulas de silla ó de carga que les fueron ocupadas por las expresadas fuerzas. En suma, los reclamantes hicieron desender su demanda á la exorbitante cantidad de trescientos treinta mil pesos que pretendían les fuera pagada en moneda de oro.

En vista de semejante pretensión, el Gobierno de la República Mexicana, como era natural, dispuso, que el Juez de Distrito de Sinaloa, en cuya jurisdicción pasaron los hechos denunciados por la Compañía minera de la Cordillera, levantara una información judicial de esos hechos y la remitiera al Ministerio de relaciones, para proporcionar así á la República los medios necesarios á su defensa, en un asunto tan grave. Por desgracia, las diligencias del Juez de Distrito encargado de practicar aquella información, Lic. Pedro N. Bermúdez, no correspondieron al fin deseado, y los hechos referidos á la Comisión mixta de Washington quedaron por esta parte subsistentes; no por pruebas judiciales que fueron adversas á México, sino porque la autoridad judicial que actuaba, no pudo encontrar ningunas.

Semejante resultado, obligó al Ministerio del ramo, á denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, como inepto ó poco diligente en el servicio de la República de México, al Lic. D. Pedro N. Bermúdez, y como comprobantes le acompañó el expediente

original que este había formado con motivo de la reclamación de los ciudadanos Norte-Americanos Nathaniel Page y socios.

La Suprema Corte entonces reunida en Tribunal pleno, y haciendo uso de la facultad que le concede la fracción 7ª del artículo 2º capítulo 3º de su Reglamento, dispuso en 10 de Julio de 1871, se suspendiera en el ejercicio de sus funciones al C. Juez de Distrito D. Pedro N. Bermudez, y se le consignara al Tribunal de Circuito de Mazatlan, para que procediera con arreglo á derecho.

El Tribunal de Cuernavaca lo hizo así, y ahora envia las diligencias que practicó en aquel sentido. Segun ellas, y por auto definitivo con que finalizan, visible á fojas 15 vuelta del primer cuaderno, no encontró *mérito bastante para instruir un proceso* al Lic. Pedro Bermudez, y por lo mismo, le levantó la suspensión que le impuso la Corte Corte, y se limita á imponer un severo extrañamiento al Promotor fiscal del Juzgado de Distrito Lic. D. Ladislao Gaona, por no haber promovido lo conveniente, apercibiéndole de mayor demostración si reincidiera en las mismas faltas que lo motivaron.

Sírvele de fundamento legal á ese fallo, la ley de 14 de Marzo de 1813, siendo de advertir que en esa misma sentencia el Tribunal de Circuito reconoce: *"que efectivamente se nota poca cuidado y diligencia por parte del Juez en esa informacion"* (la que se le previno hiciera sobre los sucesos de la Cordillera) sigue el Tribunal: *"como se ve por los mismos autos:"* reconoce igualmente que esa informacion estuvo mal practicada (bien que esto en parte se inculpa á la impericia del Promotor fiscal,) y por último el Tribunal comprende, así lo dice expresamente, *que no bastan á exculpar al Juez las razones que alega en su informe.* Y á pesar de todos estos datos expresados en los considerandos de la sentencia del inferior, este en la parte resolutive de esa misma sentencia, pronunció un fallo completamente absolutorio para el Lic. D. Pedro N. Bermudez.

Este Ministerio no abrigará por cierto, semejante convicción. Por el contrario, fundándose en los mismos considerandos del Tribunal de Circuito, tiene el penoso deber de pedir, que esas actuaciones se eleven á formal causa, á fin de que en el plenario se hagan los cargos perfectamente formulados en la comunicacion del Ministerio de Justicia, trascrita por la Suprema Corte al Tribunal de Circuito de Mazatlan y obra á fojas 1ª del cuaderno 1º, y por lo que el suscrito no los reproduce, en este pedimento ya demasiado largo.

La razon legal que el suscrito tiene para pedir así, está tomada del artículo 6 capítulo 1º de la ley de 21 de Marzo de 1813. Graduar hasta que punto sea criminal ó disculpable la ineptitud del Juez Bermudez ó si la falta de esclarecimiento en el negocio de la Cordillera, provino de una decidida completa, para que en uno ó otro caso resultando alguno comprobado, se impongan al responsable las penas señaladas en el citado artículo 6º, es precisamente el resultado que se vá buscando en la prosecucion de la causa comenzada. Solamente un fallo pronunciado despues de un exámen maduro y detenido, y previas todas las solemnidades de un juicio formal, puede vindicar el decoro de la Nacion, y la conducta, si le es favorable, del Juez encausado.

A esa determinacion prestan sobrado apoyo, las doctrinas de todos los tratadistas del derecho penal. Ellos enseñan, fundándose en la ley 26 tít. 1º part. 7ª, que para que una causa se corte en el estado de sumario, son necesarios ciertos requisitos que pueden reducirse en el caso presente, á estos dos: primero: que de lo actuado no resulte prueba alguna, no real, ni presuntiva del delito, ó en segundo lugar, que el delito que resulte sea leve, sin nota de reincidencia. En uno ó en otro caso se puede y es de ley, cortar las actuaciones en el sumario. Pero por desgracia en el presente proceso no sucede ni uno ni otro. No lo primero, porque esa Sala acaba de oír la opinion del Magistrado

de Circuito de Mazatlan, respecto de la mala formacion de las diligencias que se encomendaron al Lic. Bermudez; no lo segundo, porque del artículo 69 citado, la pena que es de imponerse al comprendido en él, bien revela que se trata de un delito grave por su misma naturaleza.

Por lo expuesto, el Fiscal concluye con las siguientes proposiciones que pido á esa 3ª Sala se sirva aprobar.

Primera: se revoca el fallo definitivo pronunciado por el Tribunal de Circuito de Mazatlan, en 9 de Setiembre de 1871, en la parte que absuelve al Juez de Distrito D. Pedro Bermudez de responsabilidad en la averiguacion practicada con motivo de la reclamacion presentada por la Compañía minera de la Cordillera.

Segunda: se previene al expresado Tribunal de Circuito, prosiga las presentes actuaciones, con arreglo á derecho, hasta ponerlas en estado de sentencia y falle luego conforme á las leyes.

Tercera: en atencion á que el Promotor fiscal D. Ladislao Gaona no ha interpuesto ningun recurso contra el extrañamiento que se le impuso en el fallo de que se vá tratando, se confirma este, en la parte que impone un severo extrañamiento al referido funcionario.

Cuarta: comuníquese esta sentencia al Ministerio de Justicia para su conocimiento.

México, 28 de Febrero de 1874. —
Altamirano.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 6 de Marzo de 1874.—Vistas las diligencias practicadas por el Tribunal de Circuito de Mazatlan, con motivo del acuerdo del Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia, que suspendió al Juez de Distrito de Sinaloa, Lic. Pedro Bermudez, en el ejercicio de sus funciones, por queja del Ministerio de Relaciones de que el expresado Juez habia manifestado ineptitud y

poca diligencia en la práctica de una informacion que se le mandó levantar á efecto de esclarecer varios hechos contenidos en una reclamacion contra México, de los ciudadanos Americanos que forman la Compañía minera de la "Cordillera."— Vista la sentencia pronunciada por el referido Tribunal de Circuito, en 9 de Setiembre de 1871, levantando aquella orden de suspension respecto del Juez Bermudez, y haciéndoles tanto á este como al Promotor Gaona, un serio extrañamiento. Visto el pedimento del Sr. Fiscal, consultando á esta Sala que se revoque el citado fallo de 1ª instancia, devolviéndose al mismo Tribunal de Circuito sus actuaciones, para que abra juicio en forma contra el Lic. Bermudez, y se confirme dicho fallo, en cuanto al extrañamiento hecho al expresado Promotor. Vistos los escritos de defensa presentados al tiempo de la vista de esta causa por el Lic. Isidro Diaz, defensor del Juez de Distrito y el Lic. Manuel Olaguibel, nombrado de oficio para defender al referido Promotor; las constancias todas que aparecen en las diligencias practicadas por el Juez de Distrito, para levantar la informacion, con todo lo demas que de autos consta, y se ha tenido presente, y considerando:

Que de los hechos contenidos en el memorial presentado por los ciudadanos Norte-Americanos de la referida Compañía minera á la Comision mixta establecida en Washington, los principales en que funda la reclamacion que hacen contra la República, eran precisamente los que debió haber investigado el Juez de Distrito de Sinaloa en la informacion correspondiente.

Que por lo mismo, todas las providencias dictadas por él, debieron haberse dirigido á esclarecer aquellos mismos hechos, y sin embargo de esto, en el auto con que dá principio á sus diligencias informativas, declara como único hecho de investigacion judicial, el muy secundario de la contrata celebrada por la repetida Compañía para el transporte de los útiles al laboreo de la mina

de Santa Bárbara de Morelos, Estado de Chihuahua, de todo lo cual aparece: que esta sola falta, sin considerar los otros defectos de la información, demuestra: si no la ineptitud del expresado Juez de Distrito, sí su poca diligencia en el caso, para cumplir con su deber.

Que por la negligencia que se nota de parte del Promotor fiscal de dicho Juzgado, ha merecido el extrañamiento que se le ha hecho.

Considerando por último: que no es de confirmarse el expresado fallo del Tribunal de Cienito, respecto del Juez acusado, por que además de reconocer las faltas enunciadas, no está fundado en manera alguna, en la ley que se cita en su apoyo.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal y con fundamento de lo dispuesto en la ley de 24 de Marzo de 1872, se decreta:

Primeros: se revoca el auto pronunciado en Mazatlan, el día 9 de Setiembre de 1871, por el Tribunal de Cienito.

Segundos: devuélvase las actuaciones correspondientes á dicho Tribunal, para que lasleve á causa formal contra el Juez de Distrito de Sinaloa, Lic. Pedro S. Bermúdez.

Terceros: se confirma el extrañamiento hecho en ese fallo, al Promotor fiscal del mismo Juzgado, Lic. Ladislao Caona, remitiéndose las actuaciones acompañadas del testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; comuníquese al Ejecutivo de la Unión y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que forman la 3ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Lozano*.—*Ignacio Ramírez*.—*Pedro Ordaz*.—*Justo Sierra*, secretario.

Obro Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal interno dice: que en las diligencias formadas con motivo de la suspensión que el C. Presidente de esta Suprema Corte impuso al Lic. D. Pedro Bermúdez en el ejercicio de sus funciones de Juez de Distrito de Sinaloa, el C. Lic. Isidro Díaz, defensor de este, ha presentado un ocurso suplicando del auto que esta 3ª Sala pronunció en 6 de Marzo proximo pasado, revocando el que dictó el Tribunal de Circuito de Mazatlan, y mandando devolver sus actuaciones con el fin de que las lleve á formal causa contra el referido Lic. Bermúdez, por la responsabilidad que pueda resultar de sus procedimientos en la información que el Ejecutivo de la Unión le mandó levantar, para esclarecer los hechos contenidos en la reclamación que contra la Nación Mexicana y ante la Comisión mixta establecida en Washington, presentaron algunos ciudadanos Americanos, relativa á la Compañía minera nombrada la "Cordillera."

El que suscribe, ha examinado el recurso interpuesto en estos autos por el mencionado defensor de Bermúdez, y en su concepto es necesario tener presente la doctrina general de derecho que enseña, que puede admitirse legalmente el recurso de apelación ó de súplica que se interpone en la instancia de algún juicio respecto de la sentencia definitiva que se haya pronunciado, ó del auto interlocutorio cuya gravámen sea irreparable; pero cuando se trata de una providencia, dictada fuera de toda instancia, que no es sentencia definitiva, ni tiene el carácter de auto interlocutorio con la calidad expresada, es indudable que no puede legalmente interponerse apelación ó súplica de dicha providencia, y aun cuando se interponga, no debe admitirse.

Por esta razón, el Fiscal juzga que no es suplicable el auto que pronunció esta Sala en 6 de Marzo proximo pasado, cuya resolución en lo principal, se reduce á man-

dar que se instruya causa al referido Lic. Bermudez; y tal resolución no causa instancia, y en caso de irrogar algun gravámen, puede repararse desde la primera instancia del proceso.

Por las consideraciones expuestas, el que suscribe pide á la Sala, se sirva desechar el recurso de súplica interpuesto en las presentes diligencias por el mencionado defensor de Bermudez, y mandar que se lleve á efecto el expresado auto de 6 de Marzo último.

México, Junio 2 de 1874.—*García Ramírez.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 23 de 1874.—Vistos en artículo y teniendo en consideracion los fundamentos legales manifestados por el Sr. Fiscal en su pedimento anterior, se declara: que el auto de 6 de Marzo próximo pasado, es insuplicable.

Hágase saber.—*Lozano.*—*Ramírez.*—*Zavala.*—*J. Sierra*, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio 2 de 1874.—*Manuel Fernandez Villareal.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el C. Ignacio M. García representante del C. Cristóbal Salinas, contra el C. Gefe político de Tehuantepec, que declaró caducos sus derechos como adjudicatario de los terrenos de "Guichixú," "Cocos Viejos" y "Pixixi."

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice, alegando para definitiva: que el C. Ignacio María García,

á nombre del C. General Cristóbal Salinas, solicita amparo de la Justicia, federal contra la providencia del ex gefe político de Tehuantepec Lic. Juan Escobar, relativa á haber declarado caducos sus derechos en los terrenos Guichixú, Cocos Viejos y Pixixi, por creer violadas en su persona, las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución general de la República, fundando su queja en la fracción 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

De autos resulta justificado que el referido General Salinas es el propietario de los terrenos en cuestion, en virtud de haber sido el adjudicatario de ellos, así como que el Gefe político mencionado hizo la declaración de caducidad que motivó el recurso de que se trata.

El hecho mismo de declarar caducos los derechos de Salinas, presupone la existencia de estos, que por otra parte está bien comprobada en autos, la caducidad de estos derechos solo puede ser declarada por los Tribunales comunes, por ser este un asunto contencioso como rectamente se deduce de la ley de 5 de Febrero de 1861, y en consecuencia, la autoridad política que decretó el despojo, es á todas luces incompetente, de donde resulta la positiva violacion de garantías de que se queja Salinas, por lo que tiene perfecto derecho para que se le otorgue el amparo que solicita.

Por tanto, y fundado en los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, y en la fracción 1ª del artículo 1º de ley de 20 de Enero de 1869 citada, este ministerio pide á V. se sirva declarar, que la Justicia de la Unión ampara y protege al solicitante contra la providencia que reclama.

Oaxaca de Juárez, Junio 20 de 1874.—*José María Ballesteros.*